

Revista
Paraguay desde
las Ciencias Sociales



Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay

www.grupoparaguay.org
ISSN 2314-1638

Castells, Carlos y Castells, Mario

POSTERGACIÓN DEMOCRÁTICA Y CRISIS DE GOVERNABILIDAD EN EL PARAGUAY:
UNA PERSPECTIVA MARXISTA REVOLUCIONARIA

Revista Paraguay desde las Ciencias Sociales, revista del Grupo de Estudios Sociales sobre
Paraguay, nº 1, 2012, pp. 25-55

*Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires
Argentina*

Disponible en: <http://www.grupoparaguay.org/revista>

RECIBIDO: SEPTIEMBRE 2012

ACEPTADO: NOVIEMBRE 2012

Postergación democrática y crisis de gobernabilidad en el Paraguay: una perspectiva marxista revolucionaria

Carlos Castells

CEALC, Universidad Nacional de Rosario

carles1205@hotmail.com

Mario Castells

CEALC, Universidad Nacional de Rosario

castellsmario@hotmail.com

A los compañeros de Opinión Socialista y de la CIR

Pehendúke tetãygua ñapu'a jasapukái opahápema pytũ,

¡Viva el nuevo Paraguay!

Víctor Montórfano, Tetãgua sapukái

Palabras clave: Democracia, Lucha de clases, Partidos políticos, Programa de Transición

Resumen

El artículo analiza la política paraguaya durante la etapa abierta por la caída de la dictadura stronista y la irrupción de la democracia burguesa, suceso inédito en la historia del país. Debido a ello consideramos que el proceso de consolidación del régimen se ha mantenido en barbecho, que su crisis crónica acota su despliegue y se encamina hacia una superación de las contradicciones. Entender el derrotero político de esta transición implica también tener en cuenta la particular configuración histórica de los actores políticos y sociales post-dictadura. La situación actual tras el juicio político al presidente Fernando Lugo señala el norte del nuevo pacto de dominación y la búsqueda de la “necesaria” derrota histórica de las masas campesinas. Estado, clases dominantes, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de prensa, son abordados para desentrañar el porqué del funcionamiento de la endeble democracia paraguaya y para postular un programa que desborde sus opresivos lindes: el Programa de Transición de la IV Internacional.

Democratic postponement and governance crisis in Paraguay: a revolutionary Marxist perspective

Keywords: Democracy, Class struggle, Political parties, Transitional Program

Abstract

This article analyzes Paraguayan politics during the period that was opened by the fall of Stroessner's dictatorship and the inrush of bourgeois democracy, an unedited situation in Paraguayan history. Because of that, we considerate that regime consolidation has remained inert, its chronic crisis avoids democratic development but it goes towards the resolution of its own contradictions. It is necessary to consider post-dictatorship political and social actors with their specific historical configuration to understand the political course during this transition. The present situation, after Fernando Lugo's impeachment, shows the way to the new domination pact and to the necessary defeat of peasant masses. We reflect on state, ruling class, political parties, social organizations and media in the way to unravel the causes of this weak democracy and to postulate a program that overcomes its oppressive borders: the Transitional Program by Fourth International.

“Una revolución se prepara en el Paraguay. La dictadura stronista, instrumento despiadado de la dominación imperialista, ha servido para madurar sus condiciones objetivas. Esta revolución desbordará los marcos de la vieja política y, removiendo en su base la estructura de los viejos partidos tradicionales, acelerará la eliminación de sus jefaturas entreguistas y asumirá gradualmente la forma de una alianza de las clases explotadas del país” (Chaves, 1971:16) Resulta admirable de este texto su apuesta profética y mucho más proviniendo de un colorado¹. En efecto, Osvaldo Chaves (gran dirigente del coloradismo

¹ La Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), es el principal partido político de Paraguay; de tendencia nacionalista y conservadora, fue fundado el 11 de Septiembre de 1887 con el nombre de *Partido Nacional Republicano*. Entre sus fundadores, además de una veintena de legionarios (ex combatientes de la Guerra de la Triple Alianza por el bando aliado) se encontraba el que fuera presidente paraguayo y general del Mariscal López, Bernardino Caballero, asesorado por el gobierno brasileño, que luego de ocupar Paraguay tras la guerra, se preocupó por formar un modelo y una clase política de acuerdo a sus intereses. Salvo por la primera parte del siglo (desde 1904 hasta 1946), fue el partido de gobierno. Entre 1947 y 1963 fue el único partido legal y por tanto la única organización que podía presentar candidatos en cualquier proceso electoral. Aún cuando se hayan realizado elecciones verificadas por organismos internacionales, hasta 2008 ha resultado vencedor en todas las elecciones generales. Luego de la larga dictadura (1954- 1989) de Alfredo Stroessner (1912- 2006) que controló el partido férreamente, y desde la elección del primer presidente civil Juan Carlos Wasmosy en 1993, la

disidente) traza en este fragmento la profecía inconclusa de la “transición hacia la democracia” en Paraguay, la maduración de esas condiciones objetivas y a la vez la saga de postergaciones que empieza con la caída de la dictadura. Buscaremos en las profundidades de la conflictividad política del período elementos que nos ayuden a comprender la dinámica de esta transición. En abierta disidencia con la concepción de “transición hacia la democracia” que propugnan los transitólogos² que acotan sus estrategias a la democratización política, creemos –contra los ultraizquierdistas– que las reivindicaciones y consignas democráticas, pese a lo que se ha llamado “reacción democrática”³, han ganado un espacio mayor en la conciencia de amplios sectores de la población. Ergo, ocupan un primerísimo espacio en los programas políticos, tanto burgueses tradicionales como populistas y nacionalistas. De resultas, entendiendo la importancia de tales reivindicaciones y confirmando la aseveración de León Trotsky que define que “el rasgo fundamental de la situación política mundial en su conjunto es la crisis histórica de la dirección proletaria” (Trotsky, 2008: 3) nuestro objetivo teórico seguirá siendo político.

Como sabemos, tras el golpe de estado del General Rodríguez⁴ se impulsaron una serie de pautas tendientes a superar la crisis de las instituciones del viejo régimen. Las medidas de apertura que consensuó Rodríguez con la oposición significaron un límite para el proyecto

organización ha visto importantes pérdidas en el porcentaje de votos hasta que en las elecciones de abril de 2008 fue derrotada por el candidato aliancista Fernando Lugo.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) es la denominación actual del liberalismo paraguayo, fundado por Domingo Laíno en 1978. Surge como oposición al régimen del general Stroessner y a las fracciones de su propio partido que avalaban la farsa democrática del régimen (PL; PLR). El actual PLRA toma el testimonio del antiguo Partido Liberal fundado en 1887, con el objetivo de reunir a todas las corrientes liberales que en ese momento se encontraban dispersas.

Actualmente es uno de los dos partidos mayoritarios junto con el Partido Colorado y es el partido gobernante debido al golpe parlamentario de junio de 2012. Federico Franco, dirigente del PLRA, había sido el vicepresidente de la República desde 2008, acompañando a Fernando Lugo dentro de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC), y asumió ilegítimamente como presidente el 22 de junio de 2012 tras la destitución de Lugo.

² Algunos de los autores más emblemáticos de esta corriente serían: N. Lechner, M. A. Garretón, T. M. Cavarozzi y G. O'Donnell

³ Como explica Horacio Lagar: “Uno de los aportes tuvo lugar cuando el movimiento de masas tomó la forma de peligrosa insurgencia y obligó a los estrategas del imperialismo a responderle de manera distinta a la habitual, es decir, que no fuera desembarcando marines sino embanderándose preventivamente con las reivindicaciones formales de la democracia. El objetivo era el mismo: someter a las masas a su control canalizando sus protestas y rebeldías por el cauce jurídico e institucional del sistema. Esta táctica democratista del imperialismo era tanto más original y defensiva cuanto que, además de responder al peligro de las masas insurgentes, se protegía ante la amenaza desestabilizadora de dictaduras militares o gobiernos bonapartistas que le resultarían incontrolables. Nació así lo que Nahuel Moreno llamó la política imperialista de ‘reacción democrática’, que no era sino una nueva forma de dominación del gobierno de EE.UU. en los países de su patio trasero. Fue así que Jimmy Carter y su misionera ad hoc, Patricia Derian, desembarcaron en las costas del subcontinente enarbolando la bandera de los derechos humanos” (Lagar 2007: 14).

⁴ El Gral. Andrés Rodríguez (1923-1997) fue un militar y dirigente político paraguayo, presidente provisional y luego constitucional de su país desde el 3 de Febrero de 1989 hasta diciembre de 1992. Su principal contribución a la historia paraguaya fue el derrocamiento, mediante un golpe de estado, del dictador Alfredo Stroessner, su consuegro

“autoritario modernizante” (democracia con partido único al estilo de México) que era el proyecto político que más le atraía a la ANR. El levantamiento del estado de sitio (vigente de manera ininterrumpida desde 1954), el reconocimiento a los partidos políticos de la oposición⁵, la libertad de prensa y sindicalización, además de la despartidización de las fuerzas armadas (una lenta transición que se aceleró luego de la crisis con Lino Oviedo⁶), el mejoramiento “formal” de la situación de los derechos humanos en el país (juicio y prisión a algunos de los responsables más reconocidos de la represión, caso Campos Alum y Pastor Coronel, pero impunidad a los responsables políticos del terrorismo de estado y de los asesinatos selectivos en el campo) y la Convención Constituyente que vino a unificar la frente al nuevo régimen, sirvieron a las diversas facciones del coloradismo en su afán de disputarse la supremacía y no quedar aplastadas bajo la losa del ejecutivo.

“A pesar de los temores de que la mayoría absoluta del Partido Colorado en la Convención Constituyente produjera un documento de corte neautoritario, el resultado fue muy distinto. Fragmentados en distintos grupos, los propios convencionales colorados prefirieron adoptar la figura de un ejecutivo débil y un congreso fuerte, con el fin de asegurar que, de estar en la oposición interna, no pasaran a la “llanura”, a la que les (sic) había destinado Stroessner” (Abente Brun, 2010: 299).

La característica principal del régimen stronista había sido el denodado empeño en conservar una fachada democrática y legal a toda costa. Su mayor jactancia era la de haber logrado en Paraguay la *democracia sin comunismo* que pregonaba la política exterior

⁵ El stronismo constituye un periodo histórico bien definido en la historia paraguaya no sólo por el impresionante poder acumulado de manera omnímoda sino por las peculiares características que mostró desde sus inicios. Como dice Roa Bastos en el Prólogo a *Es mi informe*: “En treinta y cinco años de un experimento único, de una ferocidad sin igual, en la historia política de nuestro país, el régimen stronista (1954 -1989), combinó de una manera sistematizada y maquiavélica, los principios del nazismo hitleriano y del fascismo mussoliniano con la retórica de lugares comunes de las democracias imperiales, de nulo valor en los feudos dependientes de ella mientras rigió la doctrina de la Seguridad Nacional, vínculo umbilical entre el imperio y sus satrapías castrenses y civiles” (en Boccia Paz, González y Palau Aguilar, 1994: 10). Si bien se trata de una dictadura militar, fue también un gobierno sostenido por un partido político tradicional, el Partido Colorado, y un régimen que se esforzó por mantener el ritual democrático como una fachada presentable ante la mirada internacional. Stroessner fue un hijo regional de la Guerra Fría, a lo que sumó una inesperada habilidad para manejar los hilos de los intereses internos y mantener su larga hegemonía. (Farina y Boccia Paz, 2010: 12-13) Así pues, luego de un primer período de violenta represión a la oposición política (1955-1963) la dictadura de Stroessner entró en una fase de relativa “liberalización” permitiendo la actuación, siempre controlada, de los partidos liberal y febrerista. Desde entonces el régimen se manejó siguiendo la distinción entre oposición tolerada (reconocida legalmente, con libertad para publicar sus periódicos, pero reducida a minoría parlamentaria y con importantes límites a su acción partidaria) y la no tolerada, perseguida en todas sus manifestaciones. En la primera categoría se incluían liberales y febreristas, mientras que en la segunda, comunistas y colorados populistas disidentes como Epifanio Méndez, Agustín Goiburú, detenido desaparecido víctima del Operativo Cóndor, o el citado Osvaldo Chaves.

⁶ Lino César Oviedo Silva (1943) es un ex general y político paraguayo, que sirvió como jefe de las Fuerzas Armadas de Paraguay hasta su arresto, el 22 de abril de 1996. Ha sido culpable de un intento de golpe de Estado, del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, de dirigir una masacre contra civiles y de haber incitado a un segundo intento golpista contra el gobierno paraguayo. Fue condenado por el intento de golpe de estado de abril de 1996 y posteriormente absuelto.

norteamericana. En síntesis, al caer Stroessner no sólo había caído un símbolo de la Guerra Fría, también abortaba el pacto de dominación que lo había sustentado. Pues no fue sino el stonismo tardío el que incubó su propio cáncer, propiciando un modelo de dominación que si bien benefició a los antiguos sectores dominantes, sustentando, por ejemplo, el modelo agroexportador, la irregular contratación estatal de ciertos empresarios, originando y protegiendo una burguesía fraudulenta (Setrini, 2011; Riquelme, 2003; Nickson, 2008) desató interna y externamente contradicciones aún no resueltas. Ello devino en que las esquirlas de continuismo establecidas desde el derrocamiento de la dictadura, hicieran del proceso de democratización un delirio agónico sin resolución.

Los marxistas revolucionarios -con excepciones, claro- pensamos que entre la estructura económica y la superestructura política “no hay una relación mecánica de causa a efecto en un solo sentido, sino una relación dialéctica de unidad contradictoria, de interacción e interpenetración mutua” (Peña, 2007: 73). Comprender esto tiene una importancia infinita, puesto que, como escribió Marx en su famoso prólogo a la *Contribución a la crítica de la economía política*: “Un estado social jamás muere antes de que en él se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que podía encerrar. Nuevas relaciones de producción, superiores a las antiguas, no ocupan su lugar antes de que sus razones de ser materiales se hayan desarrollado en el seno de la vieja sociedad” (1989: 8). Desde ya, el caso paraguayo y su “exitoso” capitalismo agrario nos puede brindar variadas enseñanzas al respecto. En este contexto ubicaremos las acciones de las clases sociales, sus fracciones y dirigentes políticos.

Desde 1982, al furor del crecimiento inusitado de los años setenta⁷, le sucedió una prolongada fase de estancamiento que se agudizó a inicios de los años 90 con el proceso de globalización regional. Los efectos de la plata dulce de Itaipú habían agrietado el sistema stonista y sectores de la clase media que habían sido afectados por la crisis giraron hacia posiciones de cuestionamiento a la dictadura. Así mismo, ciertos sectores sociales iniciaron un proceso de reorganización, favorecidos también por los cambios políticos en la región que decretaron el fin de la era de las dictaduras militares en el Cono Sur. El stonismo pasó a ser un limón exprimido para el imperialismo yanqui y sus aliados brasileños, y cayó por su propio peso.

⁷ El gobierno de Stroessner (proclamado por sus partidarios como el Segundo Reconstructor, continuador del legado de Bernardino Caballero) realizó obras de infraestructura que modernizaron al paupérrimo Estado paraguayo (obras viales, edificaciones, sanitarias y de electrificación) emprendiendo una vigorosa “marcha hacia el Este” para romper la secular dependencia económica con Argentina y establecerse en la órbita del capitalismo brasileño. La economía paraguaya vivió entonces sus años de mayor florecimiento durante la década del setenta, cuando el país llegó a tener un inédito crecimiento de su PIB anual durante muchos años consecutivos y establecer con el guaraní el “dólar’i” (pequeño dólar, en guaraní), una moneda estable. Esto fue posible gracias a los ingresos generados por la construcción de la represa de Itaipú y por el “boom” de la exportación del algodón.

Más allá de la importancia del general Rodríguez en el proceso de recuperación de la democracia, el resultado de la Convención Constituyente marcó el final de su proyección como figura política y marcó el verdadero hito de arranque de la misma. Si a ello le sumamos el descubrimiento por parte de Martín Almada de los archivos de la represión de la policía de Stroessner, el año 92 toma una importancia preponderante. Como se sabe, la nueva Constitución fue promulgada en un ambiente de alta tensión, sin la participación del general Rodríguez ni de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y con ella, como dijimos, nació la verdadera transición que se concatenó con el segundo eslabón de la coyuntura centrado en el llamado a elecciones de 1993.

En el partido colorado, la interna se tensó en torno a la disputa entre el sector capitaneado por el referente de la nueva burguesía surgida al amparo de los negocios con la dictadura, el Ing. Juan Carlos Wasmosy, que recibió el apoyo del general Rodríguez y sus adeptos, y el sector encabezado por Luis María Argaña, que contó con el apoyo del sector tradicional del partido, vale decir, los viejos cuadros y funcionarios del stronismo tardío. Esta disputa fue resuelta en favor de Wasmosy por la intervención de Lino Oviedo quien tomó el edificio partidario y secuestró las actas del escrutinio, las cuales -según observadores independientes- habían consagrado a Argaña como ganador por un escaso margen. Este hecho posibilitó a su vez que el Tribunal Electoral reconociera a Wasmosy como el ganador de esas elecciones e instauró a su vez la preponderancia de la lucha fraccional en la ANR como factor decisivo de la política paraguaya.

“El gobierno de Wasmosy comenzó marcado por esta doble debilidad. Hipotecado ante el general Oviedo desde las internas, Wasmosy tampoco contaba con mayoría parlamentaria. La oposición se había alzado, por primera vez, con la mayoría en ambas cámaras del congreso (...). Además, producto del sistema D'Hont y de las elecciones internas directas, aproximadamente la mitad de los congresistas colorados pertenecían al movimiento argañista” (Abente Brun, 2010: 301)

Mas el nuevo régimen de dominación tampoco podría encauzar la economía y a esa situación de crisis estructural se sumaron las crisis financieras -endémicas desde 1995- que golpearon amplios sectores de las clases medias urbanas, y la rápida desestructuración de la economía campesina, agravada por el agotamiento del proceso colonizador y la brusca caída de la producción algodónera. Como infiere Fernando Massi:

“Estos resultados dejan ver (...) que un mayor nivel de apertura no provoca mayores niveles de crecimiento económico como tampoco un mayor dinamismo del sector transable y de las exportaciones en particular. Si se considera al MERCOSUR como el impulsor principal de una nueva y mayor apertura económica del Paraguay en los noventa, se comprueba que este proceso de integración no ha sido necesariamente funcional a los resultados que se esperan de

toda liberalización comercial. Una de las razones de la debilidad del sector transable en los noventa ha sido la muy baja productividad agrícola e industrial. En términos de la productividad agrícola, y con excepción de la soja, se asiste, por ejemplo, a un descenso dramático del cultivo del algodón entre 1991 y el 2003” (Massi, 2006: 13).

Esto, en el plano político, se reflejó en la grosera descomposición del modelo prebendario del coloradismo.

Las recurrentes crisis del Partido Colorado posteriores a 1989 demostraron su incapacidad para reorganizar el modelo y establecer un nuevo pacto político que diera estabilidad al modelo de acumulación en el marco de un nuevo régimen político. El Partido Colorado no se reconvirtió totalmente al neoliberalismo, conservó cuanto pudo del viejo esquema que le permitió sustentar su clientela política y el prebendarismo (Richer, 2008:7).

Una población crecientemente empobrecida empezó a identificar el tiempo de la transición a la democracia con la inseguridad social y la crisis económica. Los sectores propietarios y empresariales del neo-coloradismo post-stronista no apostaron mucho por un nuevo orden jurídico que limitaba sus privilegios económicos y la inseguridad creció en ambos extremos de la estratificación social, alimentando el reclamo de soluciones de facto por vía de una autoridad fuerte. Resulta interesante, en este contexto, la pregunta que se planteaba Edwin Brítez al respecto: “¿Se puede considerar un logro del nuevo sistema electoral que la gente añore volver a la dictadura, o existen formas de demostrar que este factor ninguna relación tiene con lo meramente electoral?” (Brítez, 2002: 64)

La antigua ambición de poder de Oviedo, se fortaleció con su convicción de ser el principal protagonista del derrocamiento de la dictadura. Como hombre fuerte de la Caballería, principal arma del ejército paraguayo, su pretensión de recrear un sistema de mando autoritario, basado en un nuevo movimiento militar-partidario, lo condujo a un rápido ascenso durante los gobiernos del general. Andrés Rodríguez y de Juan Carlos Wasmosy. Oviedo intervino tanto en las internas partidarias de fines de 1992 como en los comicios nacionales de 1993, convencido de que la manipulación ilegal de los procesos electorales eran la norma y no la excepción de la democracia vigilada. Su publicitada frase aseverando que el Partido Colorado gobernaría al Paraguay *per secula seculorum* resumía un proyecto que buscaba reeditar el viejo sistema de dominación. Durante siete años, impuso su voluntad en los círculos del poder y ese lapso fue también aprovechado para obtener ingentes recursos económicos destinados a alimentar su proyecto político. Los sucesivos conatos o intentos de golpe de Estado, llevados al límite en el putsch del 22-26 de abril de 1996, expresan la

discrecionalidad de su accionar y acarrearon finalmente la pérdida de su comando militar directo.

El intento de golpe de abril del 96 agudizó la crisis social y económica, y sumó su cuota de ruptura a una transición que no podía ni puede aún dar respuesta a la pauperización creciente de amplios sectores rurales y urbanos. El descrédito de la dirigencia política se aceleró desde entonces hasta límites imprevisos y su figura demagógica se montó al lomo del desamparo de la población. Desde 1997, la descomposición del proceso se agravó. La impunidad del general golpista, facilitada por el congelamiento de sus procesos judiciales, le permitió ganar las internas del partido gubernamental en septiembre, luego de una rápida carrera. De todos modos, el Poder Ejecutivo (el wasmosismo ya se había aliado para entonces con el sector argañista) frenó su ofensiva a través de su detención, convertida en prisión de diez años por el fallo de un Tribunal Militar Extraordinario. Esta condena fue apelada en la jurisdicción civil por sus defensores y se volvió definitiva el 17 de abril de 1998, con el Acuerdo y Sentencia No. 84 de la Corte Suprema de Justicia. Lino Oviedo compitió así por el poder político en condición de prófugo, detenido y sentenciado, acumulando poder real mientras quedaba definitivamente al margen de la ley, condenado (hay que decirlo) por la confrontación que entablaba con la elite dirigente del coloradismo, tan corrupta y garrotera como su propia fracción. Puesto que su poder crecía negando y enfrentando al *statu quo* partidario.

La Unión Nacional de Colorados Éticos surgió a mediados de 1996, luego del golpe frustrado. Fuertemente centralizado bajo el mando personal de Oviedo, incorporó a su estructura intermedia muy escasos caudillos políticos: dirigentes que perdieron liderazgo dentro de la ANR e intelectuales que nunca lo tuvieron. Las depuraciones realizadas por Wasmosy dentro de las fuerzas armadas y de la policía sumaron nuevos cuadros combativos al movimiento. Aunque UNACE proclamó insistentemente su pertenencia colorada, el movimiento creció también fuera de las estructuras partidarias, con un discurso extremadamente crítico a los partidos. Desde sus orígenes se planteó como un movimiento separado, y Oviedo amenazó varias veces con constituirlo como un partido distinto, si él era expulsado de la ANR (Congreso Nacional de la República del Paraguay, 1999).

A raíz de la inhabilitación de Oviedo por parte de la justicia (la Suprema Corte avaló el dictamen de la Justicia Militar) se siguió lo establecido por la legislación electoral y Raúl Cubas ocupó el lugar de Oviedo y el líder de la lista opositora y el derrotado en las internas partidarias, Luis María Argaña, accedió al lugar sub-alterno en la dupla presidencial.

El triunfo electoral del Partido Colorado el 10 mayo del 98 bajo los nombres Cubas-Argaña, reabría en Paraguay el intento de retorno de un régimen bonapartista -un tipo de régimen que sin ser el fascismo, trata de imponer la mano dura sobre los trabajadores y el pueblo, apoyándose en el ejército-. Eso era así

porque detrás de la formalidad de los nombres que aparecían como vencedores, se encontraba el auténtico triunfador, Lino Oviedo, desde la cárcel. Este general y narcotraficante -ligado a los intereses de la mafia china, y desde ese punto de vista, enfrentado a los de los EEUU- había protagonizado un intento de golpe de estado en abril del 96. (...) A nadie se le escapaba que el triunfo era debido a la campaña populista impulsada por el propio Oviedo que encontró eco en el empobrecido campesinado, y apoyo de sectores militares y burgueses interesados en un gobierno de "mano dura" (LIT- CI, 1999: 3).

El llamado de Oviedo a votar por esta lista, agudizó y expandió la pelea fraccional llevándola a los partidos de la oposición. Luego de ganar con el 54% de los sufragios y de obtener la mayoría en ambas cámaras, el Partido Colorado se desmembró y los sectores argañistas aliados a la oposición consolidaron los vínculos al mismo tiempo que Cubas mostraba cada vez más su subordinación a las directivas de Oviedo. A fines de 1998, Cubas decretó su libertad, conmutándole la pena, y con ello se inició la declaración de guerra de ambos contra el Congreso y la Suprema Corte. Ésta se expidió de manera adversa, aduciendo que el ejecutivo no podía conmutar la pena sin la consulta a esa institución y decretando el regreso a prisión de Lino Oviedo. La jugada del Congreso fue aprobar el Juicio Político al presidente Cubas pero antes de que se expidiera el Senado, el 23 de marzo de 1999, se produjo el asesinato de Luis María Argaña, vice-presidente de la Nación, del cual tanto la ciudadanía como la mayoría de los observadores, responsabilizaron a Oviedo. Estamos ya en los preámbulos del "Marzo Paraguayo".

La "impugnación" de la candidatura de Argaña en las internas coloradas de 1992 y su posterior eliminación física habría que entenderlas también en el marco de la exacerbación de las contradicciones. La emergencia del populismo autoritario de Lino Oviedo desnudó las limitaciones y las distorsiones del sistema y la influencia de la mafia en el poder político, como la manipulación de la justicia en función de ciertos intereses. Acusado de acumular dinero sucio, Oviedo escondía detrás de un discurso populista la posibilidad de representar a una derecha neoliberal que podía poner en peligro todo el sistema clientelista y prebendario de la ANR (Richer, 2008: 7).

Como describe Céspedes, la rebelión contra el proyecto oviedista,

se desarrolló espontáneamente con el apoyo partidario y de fuerzas ajenas a éste, en tanto que la escalada de terror y violencia del oviedismo, fue una respuesta planificada a una institucionalidad que no se le subordinaba, particularmente la Corte Suprema de Justicia, la Convención de la ANR y el Juicio Político al Presidente de la República de parte del Congreso. La corte exigió el cumplimiento de la Ley: la Convención colorada demostró que el oviedismo era minoría ante la unión de los otros movimientos, y el Congreso decidió que se podía enjuiciar y destituir al presidente. Entonces sólo quedaba amenazar a la Corte, atracar a la Convención partidaria y atacar al Congreso. Como esta escalada no tiene respuesta ciudadana ni partidaria, continua hasta producirse el asesinato del

vicepresidente, doctor Luis María Argaña, hecho que provoca la reacción de gran parte de la ciudadanía que súbitamente desenmascara al movimiento. El asesinato coincide con una movilización campesina y amenazas de huelga general del sindicalismo pero esto poco importaba porque la sociedad se mostraba inerte y “sin dar signos de poder o de querer defender la institucionalidad democrática” (Céspedes, 1999: 148).

El “Marzo Paraguayo” rebasó la acotada institucionalidad democrática y enfrentó al oviedismo en calles y plazas del centro asunceño, con el resultado de siete jóvenes muertos y muchísimos heridos a cuestras. Las clases dominantes fueron debilitando el antiguo pacto, no porque los sectores populares pusieran en peligro el sistema, sino por las contradicciones que generaban los intereses en disputa. Ante la presión nacional e internacional, Cubas renunció y se exilió en Brasil. Oviedo, por su parte, después de desgañitarse en una alharaca prepotente, escapó a la Argentina auxiliado por su presidente Carlos Menem. El presidente del Senado y del Congreso, Luis Ángel González Macchi, asumió la presidencia de la República. La decepción de la ciudadanía fue la respuesta a la incapacidad, la corrupción, la vulnerabilidad de la justicia y la mediocridad de los liderazgos políticos. Luego de los sucesos de marzo del 99, el Estado paraguayo, completamente inoperante para combatir el crecimiento de la pobreza, la exclusión social, el desempleo y la miseria rural, debía afrontar además una fuerte escasez de recursos que lo llevó a estar al borde del default. La decisión del PLRA y del Encuentro Nacional de formar parte del gobierno de Unidad Nacional surgido post Marzo Paraguayo, dejó sin referentes a la cuestionada oposición política y marcó el punto de estancamiento de la transición conservadora⁸.

El Partido Colorado continuó su proceso de deterioro, incapaz de modernizarse, atrapado por múltiples y contradictorios intereses y sin poder revertir la crisis económica. Pero no sólo estaba la nefasta situación económica sino el mal diseño institucional, la ausencia de liderazgos (que favoreció a Juan Carlos Galaverna un inescrupuloso cuadro

⁸ Sistema que restringe y tutela derechos políticos y económicos partiendo de la premisa de que la gobernabilidad en un proceso de transición a la democracia se sostiene mediante el control de derechos y libertades, vale decir, en una democracia restringida. Casos distintos pero ilustrativos de este problema que implica a la transición a la democracia y la gobernabilidad en América Latina son los de Chile, Perú y Paraguay. Para la década de los noventa, Paraguay era el único país en el mundo que mantenía un sistema electoral en el cual el partido que lograba la primera mayoría en una elección cualquiera, obtenía, de forma automática, el 66% de las bancas de los parlamentos, de los cargos en la Junta Electoral Central (JEC), institución creada con el fin de regular todo lo concerniente a los actos electorales, y de las mesas receptoras de votos, lo que permitía que un único partido controlara todo el proceso electoral y, con ello, se perpetuara en el mismo. Como parte del triángulo político creado por Stroessner, la ANR fue el beneficiario de este sistema que llevó a que se le comparara con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México en su condición de partidos oficialistas que gobernaron por décadas a sus respectivos países. Sobre el tema se recomienda leer Lynch (1992), Montalvo Ortega (2001); Rodríguez (1998).

menor del coloradismo de la diáspora, ex miembro del MOPOCO⁹) y el aumento desafortunado de las tendencias rentistas que contribuyeron al deterioro de la gobernabilidad. Así describía el proceso Luis Galeano en un artículo publicado en la Revista *Novapolis*:

La migración campo-ciudad genera un fuerte crecimiento urbano. El sector del empleo que se expande es el informal urbano, constituido por un abigarrado conglomerado de cuentapropistas y microempresarios. Es un contexto en el que priman las relaciones laborales precarias y, en general, las conexiones sociales, ellas se ven influidas más bien por la cultura de la supervivencia diaria que por la cultura de la previsión y de las motivaciones de superación futura. Es un proceso socio-cultural que afecta no sólo a las clases sociales sumidas en la pobreza crónica. Sectores de clase media cada vez más numerosos también experimentan situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a la educación (sobre todo a los niveles medios y superiores) y a la salud (particularmente en lo relativo al seguro médico). Y la burguesía apuesta más al capital financiero y al de carácter especulador que al industrial o al empresarial generador de empleo (Galeano, 2002: 31).

Llegamos entonces a las elecciones de 2003 que consagraron a Nicanor Duarte Frutos como presidente. Figura de poco peso partidario, Nicanor había ganado las internas a Domínguez Dibb, un empresario tabacalero *outsider* de la política pero no de los negociados ni de los banquetes del stronismo. Éste fue quizás el momento de mayor decadencia de la estructura partidaria de la ANR. La desvinculación definitiva del oviedismo y la conformación de PUNACE como partido independiente aportó su cuota de crisis. Aferrado a la estructura del viejo argañismo, Nicanor aprovechó la debilidad del conjunto de la claqué política tradicional, desprestigiada hasta la médula, y asumió el control del aparato partidario con afán renovador. Tanto el PLRA como el Encuentro Nacional (PEN) habían sido arrasados por la ineptitud y el apego al “zoquete”¹⁰. De sectores conservadores vinculados a la Iglesia, surgió Patria Querida que, llamando a un voto útil, posicionó en 2003 a su corriente como tercera fuerza electoral del país.

**Cuadro 1. Resultados de las elecciones presidenciales de 2003.
Cantidad de votos y porcentaje**

Candidatos	Votos	%
------------	-------	---

⁹ Movimiento Popular Colorado: antigua corriente interna del coloradismo, resultante de la fusión de los epifañistas, seguidores de Epifanio Méndez Fleitas (1917- 1985), con los líderes colorados que salieron al exilio hacia fines de la década del cincuenta tras la derrota de la huelga general del 59. La persecución del régimen a esta fracción fue desmedida y no sólo le dio un carácter de oposición no tolerada que señala Lewis en su libro Paraguay bajo Stroessner (1986), ilegalizando a la organización, sino que llevó su persecución al terreno del terrorismo internacional, el cual se materializó por aquellos años en el Operativo Cóndor. Uno de los dirigentes más importantes del MOPOCO, el Dr. Agustín Goiburú, fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército argentino en Paraná, ciudad capital de la Provincia de Entre Ríos, y entregado a la policía de Stroessner; forma así parte del listado de detenidos desaparecidos de esta dictadura.

¹⁰ Castellano paraguayo: Carne, parte más preciada del puchero. Por extensión, cargo público, renta, coima, etc.

Nicanor Duarte Frutos - ANR	574.232	37.1%
Julio César Franco - PLRA	370.348	24.0%
Teresa Notario - PHP	1.196	0.1%
Tomás Zayas - PPL	4.559	0.3%
Pedro Fadul - MPQ	328.916	21.3%
Diego Abente Brun - PEN	8.745	0.6%
Guillermo Sánchez Guffanti- UNACE	208.391	13.5%
Pedro Almada Galeano - PFA	1.443	0.1%
Blancos	22.977	1.5%
Nulos	24.015	1.6%

Votantes: 1.546.192 - Participación: 64,3%

Fuente. Tribunal Superior de Justicia Electoral, 2003.

Paralelamente a la crisis política y el agotamiento del modelo de dominación vigente, comenzó una nueva etapa del modelo económico agroexportador, caracterizada por el cultivo de la soja; lo cual profundizó la crisis agraria con la agresiva expansión del agronegocio que inició sus choques con la economía campesina. Acompañando este proceso, el gobierno de Nicanor avanzó en la implementación de políticas neoliberales (a tres meses de asumir, se firma por primera vez en la historia un acuerdo *stand by* con el FMI) afectando con ello especialmente al sector campesino. Sin una estrategia clara de generar un nuevo modelo de dominación, Duarte Frutos intentó superar la crisis política amparándose en los intereses de los grupos de poder dominantes en el país, mientras que en el plano internacional mantenía una alianza manifiesta con el Brasil y su política de contrarrestar la influencia norteamericana en la región. Los zigzagueos de tal postura eran demasiado evidentes, y la prensa tradicional, especialmente *ABC Color* (de marcado carácter pro-norteamericano) no dejó de hacerlo notar.

Como decía Tomás Palau, el gobierno colorado aparecía como una estructura orientada en lo sustantivo a sostener los intereses de los cuatro grupos de poder dominantes en el Paraguay de la actualidad: 1)- el capital transnacional y los empresarios “nacionales” íntimamente vinculados a aquel (multinacionales financieras, del petróleo, de provisión de insumos para la agricultura de exportación, las importadoras y exportadoras, y en lo institucional a los organismos multilaterales de crédito y a la propia embajada norteamericana), 2)- el sector latifundista (sojeros y ganaderos), 3)- los narcos (dedicados a la producción de marihuana, vinculados a los que trafican insumos para la cocaína y producción terminada de la misma hacia mercados de ultramar, completando sus ganancias con el próspero negocio del lavado de dinero), y 4)- los pseudo-empresarios o “empresarios” (que forman parte o se benefician por parentesco o vínculos políticos con el gobierno siendo su

fuentes principales de enriquecimiento las licitaciones amañadas de obras públicas, el contrabando, evasiones, desvío de fondos públicos, etc.) (Palau, 2005: 36-37).

Teniendo en cuenta que todos estos grupos de poder tienen intereses anti-campesinos, no resulta extraño que el gobierno de Duarte Frutos haya sido uno de los más conflictivos en el agro paraguayo. Con la incorporación de la semilla transgénica de soja en el ciclo agrícola del verano 1999-2000, ese cultivo fue expandiéndose aceleradamente en el país, provocando lo que se ha dado en llamar la “guerra de la soja”. Desde entonces se incrementó también el uso de agrotóxicos y el precio de la tierra se fue a las nubes, provocando un retroceso general de la economía campesina. De resultas, tanto las muertes por envenenamiento, por incidencia del sicariato, como los desalojos de campesinos de sus tierras, vía compra, alquiler o amenaza velada o directa, han golpeado a estas comunidades. En pocos años, el avance del monocultivo contribuyó notoriamente en la pérdida de soberanía alimentaria.

Estas transformaciones conducen a un proceso de reestructuración y desterritorialización que afecta a la sociedad paraguaya en su conjunto. En el corto plazo, acarrea una serie de implicancias directas: las mejores tierras del Paraguay, como la margen derecha del río Paraná, se dedican al monocultivo de soja; los pocos montes que quedan corren el peligro de desaparecer; comunidades enteras están despoblándose y convirtiéndose en sojales; las escuelas cierran por falta de alumnos; pueblos enteros se intoxican y padecen de enfermedades crónicas; arroyos y pozos de agua se convierten en focos de intoxicación; animales domésticos mueren; y las cosechas de los pequeños agricultores se ven fuertemente afectadas, todo a causa del avance de los sojales y de las masivas fumigaciones de los monocultivos. Éstas son algunas de las consecuencias visibles de la plantación masiva de soja.

(...) Sin dudas, el cultivo masivo de soja ha agravado la situación del sector campesino poniendo en peligro no solamente su integridad física sino también su permanencia como sector social. (Palau y Kreschmer, 2006: 110-111)

Las organizaciones campesinas que habían logrado frenar con éxito los proyectos privatizadores y una ley “antiterrorista” en 2002, protagonizan entonces una serie interminable de conflictos que se extienden entre los últimos meses de 2003 y principios de 2004 poniendo en evidencia la falsedad del discurso de Nicanor sobre la cuestión agraria. Hacia fines de 2004, sin embargo, bajo fuerte presión del *lobby* de los terratenientes y a la par que se realiza desde la prensa una campaña de desprestigio y criminalización de la protesta, Duarte Frutos militariza las zonas rurales para contener la fuerte ola de ocupaciones. La operación mediática incluiría desde entonces la difusión en los medios de comunicación de la existencia de supuestas vinculaciones, nunca probadas, de movimientos sociales paraguayos con las FARC colombianas.

La lucha campesina, luego de la militarización, fue controlada aunque al precio de un gran desgaste político del gobierno colorado, con una evidente crisis de legitimidad que alcanzó niveles críticos. Nicanor Duarte Frutos, como vimos, había ganado las elecciones con el 37% de los votos; lejos estaba el Partido Colorado del 60% que había obtenido Rodríguez en las primeras elecciones post-dictadura. El proceso democrático entraba en una coyuntura histórica donde la oposición, aunque desgastada y desprestigiada, podía derrotar al coloradismo y lograr la tan ansiada alternancia. Ante esta coyuntura favorable, ya en 2004 los principales partidos de la oposición –desde UNACE, PLRA y PQ hasta los socialdemócratas del PEN y PS– deciden convocar a una gran Concertación Nacional (CN), incluyendo a los partidos de izquierda, en vistas de desplazar al Partido Colorado del poder.

La amplitud de la convocatoria –decía Hugo Richer en aquel entonces– reconoce que, pese al deterioro del aparato clientelista colorado, afectado por la crisis económica –su gran base depende de las prebendas y cargos políticos–, la oposición conservadora carece de una acumulación económica suficiente para enfrentar al bloque de contratistas estatales, los sectores empresariales fuertemente vinculados con la corrupción, los latifundistas, agroexportadores y mafias de todo tipo. He aquí el marco estructural del origen y la composición de los distintos sectores de la burguesía paraguaya. (Richer, 2006: 61)

Sin haber resuelto el dilema que para ella había significado la transición política, a la que no terminaba de acomodarse, se producía entonces la clara división en la burguesía paraguaya entre los sectores más tradicionales y corruptos (narcos y “empresarios”, como los llamaba Palau), vinculados históricamente a la ANR, y una fracción más modernizante, vinculada al gran capital transnacional y al agronegocio que contaba y cuenta aún con el diario *ABC Color* como su vocero declarado. Esta última fracción, tan conservadora como cualquier otra, desconfiaba del oportunismo de Nicanor, su política internacional pro-brasileña y pro-Mercosur y, fundamentalmente, de su discurso populista. Es así que desde *ABC* se comenzó a llamar deliberadamente a una alianza opositora que desalojara a la ANR del gobierno y estableciera un nuevo pacto de dominación.

No obstante estos intentos, la crisis de legitimidad política que imperaba en el gobierno, acicateado por la campaña en favor de la Concertación, no fue canalizada por la oposición burguesa. Frente la manifiesta incapacidad de la oposición tradicional, el 29 de marzo de 2006, en una de las mayores movilizaciones políticas realizadas contra el gobierno (convocada para denunciar la injerencia y manipulación de la Corte Suprema de Justicia por parte del Poder Ejecutivo y el Partido Colorado) el principal orador fue el - hasta ese momento obispo de la Diócesis de San Pedro- monseñor Fernando Lugo.

Los sectores dominantes no encontraron una solución política adecuada a sus intereses, y en ese “vacío” generado por la descomposición e inoperancia que afectaba a la dirigencia opositora, se coló el fenómeno luguista que rápidamente prendió en las organizaciones sociales y movimientos de izquierda. Desde ese primer momento, la carrera política de Lugo fue maratónica: en menos de un año renunció a su condición de obispo y anunció su candidatura a la Presidencia de la República, contando con una gran aceptación popular. Siendo candidato, Lugo no dio definiciones políticas de alcances programáticos. Más bien, lo que predominó en su discurso fue el eclecticismo, el llamado a la “unidad nacional, sin exclusiones”, la denuncia de la corrupción, autoritarismo y pobreza del país, dejando abierta la posibilidad de acuerdos con sectores conservadores como P-UNACE. Como obispo de la diócesis de San Pedro, una de las zonas rurales más pobres y conflictivas del país se había mostrado cercano a las luchas y reclamos campesinos, inspirado en algunas líneas de la Teología de la Liberación, por lo que no tardó en ser considerado como “izquierdista” por los sectores oligárquicos.

Una vez avanzada la campaña hacia las elecciones de abril de 2008, la Concertación se rompe, produciéndose el alejamiento de Patria Querida y UNACE que deciden llevar sus propias candidaturas. Finalmente, tras arduas negociaciones, se conforma la Alianza Patriótica para el Cambio que incluye a toda una multitud de partidos socialdemócratas y de izquierda, y al PLRA, que se transforma en el brazo conservador de la misma. Triunfaba entonces la línea centrista de Lugo, definida por su apelación a la figura del “poncho juru” (la boca del poncho) amplia y ubicada justo al centro.

El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales con el 40,82% de los votos (704.966), frente al 30,72% (530.552) de su principal contrincante de la ANR, Blanca Ovelar, del círculo cercano a Nicanor. Se terminaba, de esta manera, con 61 años de gobiernos colorados ininterrumpidos. El triunfo había generado expectativas en amplios sectores de la población, expectativas de un cambio que no representaba sólo la tan mentada alternancia sino toda una revolución política. Pero estas expectativas no tardarían en esfumarse.

Por lo pronto, la Alianza Patriótica para el Cambio no estaba exenta de contradicciones y éstas no tardaron en explotar tras el triunfo, especialmente en el enfrentamiento de Lugo con su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Este enfrentamiento se correspondía con el otro que oponía al Bloque Social y Popular (más la izquierda de la APC) con el PLRA. A pesar de que sectores de la clase dominante miraban con recelo al PLRA, desconfiando de su capacidad para contener a la izquierda, los sectores conservadores habían resultado bien

parados del tan mentado cambio. La propuesta de la Alianza había ganado con una participación del 65,5% pero en la composición del poder legislativo sólo entraron cinco parlamentarios de agrupaciones de izquierda.

En esas condiciones, Lugo insistió en su posición de centro –poncho juru–, proponiéndose como mediador entre intereses inconciliables. La fragmentación de la izquierda que se presentó a través de diez listas y otras tantas propuestas electorales impidió que duplicara su representación parlamentaria, lo cual tampoco hubiera alterado sustancialmente la correlación de fuerzas con los sectores ultra conservadores. En la debilidad de la presencia de la izquierda pesaron las condiciones socio-históricas adversas; la derrota que carga encima la débil clase obrera paraguaya (atomizada y desarmada desde la división de la CUT) y la exigua experiencia frentista. De hecho la contribución más importante de los movimientos campesinos organizados no fue cuantitativa. Los liberales, con el 27% de los votos, obtuvieron una holgada mayoría de parlamentarios dentro de la Alianza, y dada su orientación conservadora se planteó la paradoja de una Alianza triunfante con una mayoría refractaria a los puntos centrales de la propuesta electoral esgrimida (Fogel, 2009: 52-53).

Con un Parlamento casi unánime en su contra, el gobierno de Lugo no pudo (y no quiso) llevar adelante el programa de cambio que había prometido en su campaña electoral. Presionado por una derecha retrógrada, cuyo principal vocero como siempre es el diario *ABC Color*, no dudó en ceder todas sus iniciativas progresistas al menor intento desestabilizador de los poderes fácticos existentes. Y es que el escenario abierto por la derrota de la ANR implicaba dos agendas completamente diferentes, dos caminos contrapuestos, pero ambos presentes en el mapa político opositor ya desde el gobierno de Nicanor. Por un lado, los sectores dominantes precisaban reformular un nuevo pacto de dominación para remplazar el que había encabezado el Partido Colorado, ya caduco. La alternancia –inérita en el Paraguay– representaba todo un desafío para las clases dominantes. Por otro lado, las organizaciones populares, movimientos sociales y sectores progresistas pretendían una aceleración del proceso de democratización, siempre frenado por los intereses representados por la ANR en el poder.

Lugo había asumido dos grandes compromisos con esos sectores; compromisos que de ser impulsados afectarían sensiblemente la estructura social y económica del Paraguay. En primer lugar, su propuesta de una Reforma Agraria integral implicaba un enfrentamiento directo con los sectores latifundistas y las multinacionales del agronegocio (Monsanto, Cargill, ADM, etc.). En segundo lugar, su propuesta de renegociar los Tratados de Yacyretá y, especialmente, de Itaipú (verdaderos monumentos a la dependencia) que, además de exigir

cuestiones fundamentales para el futuro del país (como precios justos, libre disponibilidad de la energía correspondiente al Paraguay) suponía el enfrentamiento “con una estrategia geopolítica de expansión y dominación, impulsada por Itamarati en consonancia con los grandes intereses de ciertos sectores de la burguesía brasileña” (Richer, 2008:11). La oposición entre las promesas progresistas de Lugo y los intereses imperiales del Brasil también se manifestaron en el problema agrario: uno de los actores más importantes de oposición a la Reforma Agraria son los “brasiguayos”, empresarios agrícolas que exigen el apoyo de su país ante la amenaza que representan los campesinos paraguayos a sus intereses.

Las organizaciones campesinas, fundamentalmente las del norte del país, expectantes ante las promesas electorales, no se mantuvieron pasivas y a poco de la asunción del ex obispo comenzaron un plan de lucha con ocupaciones masivas de tierras en los departamentos de Concepción y San Pedro, este último gobernado por José “Paková” Ledesma uno de los políticos más cercanos al nuevo presidente. Pero las expectativas campesinas se desvanecieron pronto, la agenda progresista de Lugo no habría de cumplirse. La mayoría de las instituciones públicas estaban administradas por sectores conservadores como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Industria y Comercio, Itaipú y otras.

El PLRA que maneja estos espacios desarrolla una política claramente dirigida a sustituir el prebendarismo colorado, acumulando estructuras y fondos para encarar las próximas elecciones con los recursos del Estado. Gustavo Setrini examinando la historia de las relaciones Estado-sociedad en el Paraguay “argumenta que el patrón de crecimiento económico durante el período autoritario del Paraguay incorporó diversas clases sociales en el sistema político a través de redes clientelares institucionalizadas”, agrega además que “(l)os cambios institucionales formales, provocados por la democratización y por la integración regional, no fueron suficientes para alterar este patrón de organización de interés, dando lugar a fuertes continuidades a lo largo de la década de 1990 y principios de 2000” (Setrini, 2011: 2). Su hipótesis central es, sin embargo, que “las nuevas reglas electorales y las nuevas condiciones económicas han producido un cambio gradual desde un clientelismo monopólico muy coherente hacia una forma más plural y menos coherente de clientelismo, con mayor espacio para la competencia por los recursos del Estado y el poder” (Setrini, 2011: 2). Un poco menos optimista es la opinión de Diego Abente Brun cuando define que “el legado más importante, duradero y deletéreo de la dictadura ha sido el fortalecimiento de un partido de Estado que monopolizó el empleo público, los contratos del gobierno, el acceso a los servicios públicos, el ingreso a las fuerzas policiales y militares –en suma, todo el poder del Estado”

(Abente Brun, 2011: 40). Esto, según Abente, “le da una ventaja superlativa sobre su principal rival, el Partido Liberal, y sobre las demás fuerzas políticas”, sin dejar de señalar que

Las otras fuerzas políticas tampoco han escapado a la perversa lógica del clientelismo. El Partido Liberal es también clientelista y los partidos nuevos, desde el Encuentro Nacional hasta las nuevas agrupaciones de izquierda, han sucumbido también a esta lógica. Sus líderes confiesan en privado que, dadas las circunstancias, no existe otra forma de operar y, así, la excepción rápidamente se convierte en la regla, las concesiones tácticas en opciones estratégicas y, más temprano que tarde, las diferencias entre los viejos y nuevos partidos terminan difuminadas (Abente Brun, 2011: 40)

La oposición del Parlamento a toda medida popular del ejecutivo se volvió una constante, así como la decisión de Lugo de desalentar toda lucha y atemorizar a los movimientos sociales con una inminente escalada represiva de la derecha. Tal escalada represiva, que su gobierno activaría por presión de los sectores dominantes, genera su mecanismo de justificación con la aparición del fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esta supuesta guerrilla marxista y nacionalista surge hacia marzo de 2008 con la quema de un galpón en la estancia “Santa Herminia”, cerca de Kuruzú de Hierro, Departamento de Concepción. Pero su explosión mediática ocurre a fines de 2008 cuando realiza el asalto a un cuartel ubicado en Tacuatí, Departamento de San Pedro, cerca del límite con Concepción, donde sustraen armas e incendian el lugar. A partir de entonces, una violenta campaña de criminalización de la protesta social (especialmente campesina) de los grandes medios de comunicación arremetió con virulencia al gobierno “castrochavista” de Fernando Lugo, escarneciendo a los “terroristas” que luchaban en el campo. La dudosa fiabilidad de la justicia y de la prensa paraguayas –acostumbradas a la fabricación de casos– así como el particular contexto de su surgimiento, hace dudar a algunos autores de la existencia del EPP (Pereira, 2011). Como dato auxiliar, según informes –siempre dudosos, cuando no directamente falsos– de la prensa paraguaya, el EPP sólo cuenta con 14 militantes, lo que no quita que la policía paraguaya lo considere una “organización criminal con sólida estructura” (Espínola, 2009). Más allá de la consideración de su dudoso papel, está claro que el EPP ha sido utilizado por la derecha como chivo expiatorio no sólo para la criminalización de la protesta social sino para cubrir incidentes claramente mafiosos, como incendios intencionales de haciendas o secuestros. Esta teoría cobra fuerza si pensamos que en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay operan importantes mafias ligadas al narcotráfico, contrabando y tráfico de armas; mafias que conforman grandes carteles especialmente si contamos a sus socios brasileños.

Con la emergencia del EPP, sus siempre supuestos vínculos con el desaparecido Patria Libre y los tan mentados –y también nunca probados– vínculos con las FARC, la campaña de criminalización alcanzó a los movimientos sociales, impulsada por el mismo gobierno de Lugo. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, según el Informe anual 2011 de la CODEHUPY (Comisión de Derechos Humanos de Paraguay) se marca un claro incremento en la violación de los derechos humanos en el país:

En tres años de gestión del gobierno de Lugo, se declaró el estado excepción en dos oportunidades, con la justificación de perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sin embargo estas medidas, sirven de justificación para abultar el ya excesivo gasto militar así como también para criminalizar y perseguir a luchadores/as sociales, en un claro mensaje por parte de las políticas de seguridad en un control y disciplinamiento de la población para desmovilizar y acallar las organizaciones campesinas. (Acevedo, 2011: 429)

En tal escenario la implantación de la Reforma Agraria se convirtió en la fruta podrida del postre. Ahora era necesario contrapesar esa defraudación de la voluntad popular con un triunfo en la otra gran promesa: la renegociación del Tratado de Itaipú. El progresismo de Lula tenía límites precisos, los de la oligarquía brasileña y sus intereses imperiales, por lo que esta renegociación fue ardua y el gobierno brasileño se negó a ceder los espacios de poder ganados por el tratado de dos dictaduras militares. Finalmente, en 2009, el gobierno brasileño accedió a renegociar el pago, aumentando de 120 millones de dólares a 360 millones de dólares anuales el valor que paga a Paraguay por la energía de Itaipú. El acuerdo, duramente criticado por la oposición al PT, por considerarlo una caridad que encarecería la tarifa de electricidad de los consumidores brasileños, tampoco representó un triunfo para Lugo que no consiguió que Brasil pague precios de mercado, libere la posibilidad de vender a terceros o ceda posiciones en la administración del ente binacional. No obstante, la triplicación del precio de la energía significó una importante masa de dinero que comenzó a ingresar al estado, permitiendo la financiación de nuevos programas para fortalecer las precarias políticas de salud y educación públicas.

Como dice Atilio Borón, “a pesar de las advertencias de numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay, Lugo no se abocó a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza social que con gran entusiasmo lo elevara a la presidencia en agosto de 2008” (Borón, 2012). En efecto, Lugo no sólo no consolidó ese espacio en donde podía haber contrapesado el dominio abrumador que el sector conservador tenía sobre el Congreso sino que se dedicó a pasivizar, mediante la cooptación y la represión al movimiento campesino y a la lucha social en general.

El Congreso paraguayo, envalentonado por un gobierno que le temía tanto como ellos a la movilización popular, se dedicó a sancionar leyes antipopulares y vetar cualquier medida progresista. Se aprobaron la ley que cercena los derechos de las radios comunitarias a recibir publicidad pública y privada, restringiendo además el alcance de estas emisoras; la ley antiterrorista, que criminaliza la lucha social; el recorte de fondos sociales; la habilitación de 350 millones de dólares anuales para el pago de la deuda externa. Además, se generaron los proyectos de ley a favor de las semillas transgénicas y contra las semillas nativas, sancionadas recientemente tras el golpe parlamentario.

De resultas, la izquierda luguista termino haciendo, de hecho, un frente común con el agrupamiento conservador amparado en el Congreso para confrontar con los campesinos, como lo demuestra el decreto de Estado de Excepción en los departamentos del norte del país. No obstante, luego de arduas reuniones previas y de procesos de unificación (como el Espacio Unitario-Congreso Popular de la izquierda marxista que apoya a Lugo; y la Alianza Patriótica para el Cambio, que agrupa a los partidos de orientación socialdemócrata), en marzo de 2010 se conforma el Frente Guasu (Grande, en guaraní) que reúne a gran parte de la izquierda paraguaya. Sin mucho tiempo para prepararse y en alianza con el PLRA, el Frente incursionó en las elecciones municipales de 2010, obteniendo cuatro municipios y alrededor de 170 bancas concejales en todo el país. A pesar de lo magro de los resultados ante el abrumador triunfo colorado en esas elecciones, no deja de ser notorio que se trata de la primera vez en la historia que la izquierda gobierna a nivel municipal, si exceptuamos el caso de Carlos Filizzola (un proyecto socialdemócrata de ribetes claramente neoliberales) en Asunción en 1991.

Las continuas concesiones de Lugo a la derecha como la sanción del Estado de Excepción en el norte del país, los acuerdos bilaterales con países como Colombia (reafirmando la misma política de Duarte Frutos) o Israel para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad en operaciones de contra-insurgencia, la vista gorda a la emergencia de fuerzas paramilitares en el campo, en vez de debilitarla, exacerbaron en la derecha paraguaya sus rasgos más reaccionarios. Las editoriales de los medios de prensa volvieron a manifestar la burda retórica del stronismo, un compendio ilógico de macartismo político, alharaca nacionalista y defensa a ultranza del capitalismo transnacional y sus socios brasiguayos. Demostraban así su incapacidad para articular una democrática reaccionaria, embanderándose preventivamente con las reivindicaciones formales de la democracia para someter a las masas a su control y canalizar sus protestas y rebeldías por el cauce jurídico e institucional del sistema. Ya ni podían admitir la presencia de la izquierda en el debate político, tal el carácter

retrógrado, atado al viejo paradigma stonista de la democracia sin comunismo de la derecha paraguaya. Sólo así se entiende la apuesta en el último tramo del gobierno de Lugo, no por el desgaste sino por su destitución mediante un juicio político.

Como vimos, luego de haber sufrido las consecuencias de la crisis internacional, la economía paraguaya se recuperó con fuerza inusitada manteniendo el ritmo hasta mediados de 2011. En el segundo semestre del año la aparición de un brote de fiebre aftosa en el Departamento de San Pedro afectó adversamente las exportaciones cárnicas y el sector de la industria frigorífica. La inflación se mantuvo bajo control disminuyendo del 7,2 % interanual para diciembre de 2010 a 4,9 % interanual para diciembre 2011. Las cuentas externas mostraron también un saldo favorable pese al déficit de la balanza comercial gracias a los ingresos de las binacionales Itaipú y Yacyretá y las remesas del exterior. Más allá del Programa Tekeporá, esta situación no cambió nada durante el gobierno de Lugo: el “boom” del crecimiento del PBI no se reflejó en la disminución de la pobreza y la desigualdad existentes. De acuerdo a datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el 30% de la población paraguaya vive en la pobreza en tanto que la pobreza extrema afecta al 19% de la población. Y como es el país más agrario de América Latina, la pobreza se localiza principalmente en el área rural donde vive el 47% de la población, del cual, el 70% es pobre y el 30% vive en la pobreza extrema. También, según datos de PNUD, Paraguay figura entre los países de peor distribución de la riqueza: el 20% más rico concentra el 62,4% de los ingresos y el 10% más pobre apenas el 0,7%. El principal factor productivo del Paraguay es la tierra y el 3% de los mayores propietarios tiene el 85% de la superficie total (Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay, 2011). Esas cifras encierran en sí mismas el mayor problema del país.

La Liga Nacional de Carperos (LNC)¹¹, irrumpió en la vida política nacional con una serie de ocupaciones de gran impacto mediático. El acontecimiento más importante que llevaron a cabo, fue, sin dudas, la ocupación en la zona de Ñacunday, a principios de 2012, de la propiedad del sojero brasileño Tranquilino Favero y otros colonos de la misma nacionalidad, con la participación de miles de personas. En realidad se trataba de una reserva ecológica apropiada por estos colonos mediante títulos falsos, y reconvertida en un gigantesco sojal. El gobierno de Lugo, constantemente presionado por el macartismo de la derecha

¹¹ Organización de nuevo cuño que aglutina campesinos sin tierras; se diferencia de otras organizaciones tanto por el método como por el sujeto que incorpora a la pelea por la tierra, ya que la LNC no se organiza como sindicato rural sino que lo hace a partir de sus ocupaciones de tierra. Impulsa la acción directa de manera ultrazquierdista, sus apariciones tienen siempre una trascendencia mediática muy grande, pero no deja de mostrar sólidos vínculos con la superestructura política burguesa. Sus dirigentes más reconocidos son José Rodríguez y Eulalio López.

paraguaya que pedía una defensa de la propiedad privada (a pesar del abominable cúmulo de irregularidades en la que se sustenta), en vez de empezar a regularizar la situación, sólo atinó a innovar la manera de tratar la cuestión de las ocupaciones.

En la mañana del pasado viernes 15 de junio un contingente de la Policía Nacional, junto con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), y comandados por la fiscalía de la zona, procedieron a ejecutar una supuesta orden de desalojo de la finca propiedad de la firma Campos Morombí S.A., en Curuguaty, Departamento de Canindeyu.

(...)

El operativo de desalojo contó con 324 efectivos policiales, y debía negociar la salida de unos 60 campesinos. Dos columnas de policías se acercaron a la finca, cada una desde un flanco diferente, rodeando a los campesinos desde las dos entradas al predio. Los efectivos policiales de la primera avanzadilla de cada columna eran principalmente agentes del grupo de antimotines que iban desarmados, portando únicamente escudos y porras, acompañados por algún efectivo ordinario de la Policía Nacional con pistola al cinto. Más atrás, en un segundo grupo se encontraban otros efectivos que contaban con armas largas y que se suponía no deberían de actuar (sic), pues estaban desplegados para intervenir únicamente en caso de que sucediese algún problema mayor.

En la entrada de la finca fueron recibidos por un grupo de unos 30 campesinos, entre los que se encontraban mujeres y niños. El Comisario Erven Lovera, experimentado en este tipo de procedimientos, comenzó a negociar la salida pacífica de los campesinos, una forma de proceder típica en anteriores desalojos y que nunca había traído mayores problemas.

Sin embargo, en medio de la negociación, se desató un tiroteo que se tradujo en una brutal matanza que terminó con 6 policías y 11 campesinos muertos, dejando decenas de personas heridas.

(...)

La información que acompañó al trágico suceso fue desde un principio contradictoria. Algunos hablaban de francotiradores, otros de campesinos radicalizados, otros de grupos de infiltrados ajenos al asentamiento, incluso algunos afirmaban que se había tratado de un error de fuego cruzado entre policías. Con respecto al armamento, mientras unos informes hablaban de una emboscada con disparos de larga y media distancia, otras autoridades cuestionaban los informes y hablaban de disparos cercanos por parte de los campesinos que recibieron a la Policía. Algunas evidencias hacían sugerir el uso de armas automáticas, mientras que la Fiscalía ha terminado afirmando que se ejecutó con escopetas de caza, sin querer valorar esa posibilidad. Las huellas de las heridas en los fallecidos también arrojaban información que en ocasiones entraba en contradicción con otras afirmaciones. Además, las afirmaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales de la Policía una vez entró (sic) en el campamento ganaron peso al encontrar al día siguiente dos cuerpos más abandonados en el predio. Y todo ello acompañado del descubrimiento de la falta de titularidad de Blas N. Riquelme sobre las tierras que desataron el conflicto (Martínez, Laíno y Quevedo, 2012: 7-8).

El caso “Ñacunday” había significado un quiebre en la pasivización social de las organizaciones campesinas. Ante la negativa del presidente de reprimir la ocupación de

tierras, *ABC Color* lanzó una campaña denunciando la connivencia entre Lugo y los “subversivos” de la LNC (*ABC color*, 25/ 02/ 2012; 13/ 03/ 2012; 31/ 3/ 2012, etc.)¹². Tras los sucesos de Curuguaty, la prensa se hizo eco de la supuesta emboscada de campesinos que manejó en un primer momento la fiscalía, llegando inclusive a reflatar de manera ridícula la hipótesis de la infiltración de efectivos del EPP. La confirmación del dato de que los campesinos estaban armados provocó una derechización momentánea de la opinión pública y eso precipitó la renuncia del Jefe de la Policía y del Ministro del Interior. Pero la idea de un montaje comenzaba a cobrar fuerza en medios alternativos. El enfrentamiento tenía muchos puntos oscuros y crecía la sospecha de francotiradores que habrían disparado sobre campesinos y policías a la vez. La amenaza de juicio político, siempre presente desde 2008, volvió a ganar estado público. Queriendo frenar el embate del Parlamento, Lugo dio otra señal de disciplinamiento a los mandos de la derecha, nombrando al colorado Rubén Candia Amarilla como Ministro del Interior, y al cuestionado comisario Armando Sanabria como Comandante de la Policía.

Esa misma noche, la Cámara de Diputados aprobó, con 76 votos a favor y 1 en contra, su realización. El mismo viernes 22 de junio, con una rapidez inusitada que no dejó de llamar la atención de la región y del mundo, se fraguó el “juicio sumario”. La misma noche del viernes, el vicepresidente liberal Federico Franco asumió como presidente de la República. La destitución que no contempló las formalidades del “debido proceso” adquirió la magnitud de una “paparruchada jurídica” y suscitó un unánime rechazo por parte de la comunidad internacional¹³.

¹² Sirvan para captar el tenor de la línea editorial algunas parrafadas de esta campaña: “En las escuelas del asentamiento de los carperos la demonización del empresario Tranquilo Favero y de los productores de soja es la constante. La ‘usurpación de las tierras de los paraguayos’, el odio a productores brasileños y el ‘derecho que tienen de acceder a las tierras’ son temas desarrollados en las aulas, según se constató ayer. En los pizarrones pegaron carteles xenófobos, que hacen deletrear una y otra vez, según confirmó una escolar. ‘Favero tiene 162.000 hectáreas de tierra que quiere repartir a los carperos en partes iguales. Hay 1.500 carperos. ¿A cuántas hectáreas iguales de tierra le toca a cada uno?’, reza uno de los carteles en una de las aulas donde se impartía matemática. En otra parte, aparentemente en el desarrollo de clases de comunicación, está escrito’. Narración fantástica que se basa en un hecho: ocupación” (*ABC Color*, 13 de marzo 2012). O esta otra de Gonzalo Quintana: “Lugo y su equipo, una vez estabilizados en el Gobierno con pleno control sobre los recursos públicos, influencia en los demás poderes del Estado y las alianzas externas como mecanismo de reaseguro, desarrollan a plenitud -con un ritmo acelerado, ahora, a la luz pública- el plan para destruir el estado de derecho. Es que el sistema jurídico-político de nuestro país les obliga a relaciones de hecho (de facto) no de derecho” (*ABC Color*, “Ñacunday o el resumen de la subversión”, 31 de marzo de 2012).

¹³ El libelo acusatorio contra Lugo, mamarracho jurídico que no resiste ningún análisis y no adjunta prueba alguna de las acusaciones, es un ejemplo claro de estrechez mental y la deficiente formación de los cuadros de la derecha paraguaya. Los cinco puntos acusatorios son los siguientes:

1)- *Acto político en el Comando de Ingeniería*. Se trata de un congreso de juventudes socialistas, organizado por el P-Mas en 2009 en la sede del Comando de Ingeniería del Ejército, que contó con la aprobación de Lugo y fue financiado con dinero de la Entidad Binacional Yacyreta. El revuelo que en su momento generó el acto, implicó la iniciación de cargos judiciales que, para el 2011, como dijo la defensa de Lugo durante el juicio, ya habían

Como dice Metzarós con gracia e ironía: “ahora tenemos la palabra mágica explicativa de todos nuestros problemas, que no se nos presenta como una huérfana infeliz, solitaria, sino como parte de algo que se parece a una triada pseudohegeliana fukuyamizada: confianza – pérdida de confianza– exceso de confianza” (Metzarós, 2009: 25). Hemos señalado las distintas fuerzas centrifugas y centrípetas que se ciernen sobre el Paraguay enmarcando los vaivenes de su política exterior en las contradicciones del sistema económico del mundo actual; la importancia económica del Brasil que sateliza económicamente al Paraguay, entra en fricciones con la política exterior norteamericana que no ha podido ocultar su rol protagónico en el golpe parlamentario (Borón, 2012; Calloni, 2012). Nosotros creemos que la

prescripto. La denuncia no contaba con más respaldo que el macartismo propio de la burguesía paraguaya. Este fragmento es esclarecedor: “Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa sólo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares”. La “instigación de la lucha de clases”, repetida varias veces en todo el libelo, aparece claramente como delito.

2)- *Caso Ñacunday*. El gobierno es considerado como “instigador y facilitador de las invasiones de tierras”. En efecto, se aduce que “la falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice”. Además, el que el gobierno haya recibido a los dirigentes “carperos”, y que éstos trabajen conjuntamente con las fuerzas de seguridad para la solución de los conflictos, es una muestra más del “incondicional apoyo” del gobierno “a estos actos de violencia y de comisión de delitos”. La criminalización de la protesta social sirve de base también para la acusación al presidente.

3)- *Creciente inseguridad*. Este punto es el más ridículo de todos, se acusa al presidente hasta de los “robos en cumpleaños” (según el dicho de uno de los diputados acusadores) perpetrados por delincuentes comunes, además de los crímenes supuestamente cometidos por el EPP y de la actividad del crimen organizado. Pero la joya es la acusación de que el presidente incentiva la lucha de clases. Según el libelo, apuntando otra vez a la criminalización de la protesta social, “el Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego solucionar”. El presidente pretende “proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI”. Finalmente, en una clara expresión de sus convicciones retrógradas, el libelo arguye que “Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos los ciudadanos pero resulta inadmisibles e injustificables que pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados”. Es obvio que esta afirmación entra en contradicción con los más elementales derechos humanos.

4)- *Protocolo de Ushuaia II*. Según los promotores del juicio, el documento constituye un atentado a la soberanía del Paraguay. Según el libelo, el documento firmado en Montevideo, que reemplaza al anterior Protocolo (Carta Democrática del Mercosur), fue firmado de manera poco transparente, y se acusa al gobierno de no remitirlo al Congreso para su tratamiento. El problema real es que el documento prevé sanciones para aquellos países en que los procesos democráticos se interrumpan, incluyendo la posibilidad de cortar el suministro de energía. El libelo acusa que el documento “fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros”. Teniendo en cuenta los sucesos acontecidos recientemente, los parlamentarios sabían lo que hacían, ya que el Protocolo justamente trataba de evitar lo que ellos finalmente hicieron en Paraguay.

5)- *Caso Matanza de Curuguaty*. Se acusa a Lugo no sólo de “inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación” sino que, volviendo al macartismo que predomina en su escritura, el libelo avanza en que Lugo “gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho”. La similitud era tan evidente que el senador liberal Luis Alberto Wagner, que se mantuvo fiel a Lugo, no tardó en considerar el parentesco entre estas afirmaciones y el nefasto programa “La voz del coloradismo”, vocero del régimen de Stroessner.

pelea por el socialismo en Paraguay sólo es viable si conecta con la lucha por la revolución en Brasil y Argentina. La revolución socialista paraguaya, y en esto diferimos con el planteo inicial de Osvaldo Chaves, va unida como el eco a la voz a la lucha de las masas trabajadoras del Brasil y la Argentina y a los sacudones de la lucha de clases en estos países. No son determinismos económicos lo que planteamos sino debilidades propias de la superestructura política paraguaya complejizada por la violencia sub-imperialista. Como afirma el Programa de Transición: “la lucha por las más elementales reivindicaciones de independencia nacional y democracia burguesa se combina con el combate socialista contra el imperialismo mundial. Las consignas democráticas, las reivindicaciones transitorias y los problemas de la revolución socialista no constituyen etapas históricas aisladas, sino que están íntimamente unidas” (Trotsky, 1998: 19). De modo tal que esas debilidades propias de una economía dependiente por partida doble pueden ser un arma para las masas populares, no sólo paraguayas sino de la región toda.

Ellas ponen a la orden del día el rol superlativo de la principal institución articuladora: la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente puede ser propulsora¹⁴, no

¹⁴ Adjuntamos como modelo el “Preámbulo” que redactó Horacio Lagar en julio de 2007, adaptándola a los requerimientos de la República del Paraguay:

Preámbulo

Nos los representantes del pueblo de la Nación Paraguaya, reunidos en Asamblea Popular Constituyente por voluntad y elección de las organizaciones obreras y campesinas, de los barrios, de las agrupaciones sindicales, de los organismos de derechos humanos y de los partidos de la izquierda, en cumplimiento de acuerdos establecidos libre y democráticamente, con el objeto de reconstruir el país sobre nuevas bases de independencia nacional frente al imperialismo, recuperar la soberanía, imponer la justicia despojando del poder a las clases explotadoras, asegurar la paz interior suprimiendo la violencia de los represores genocidas y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestros hijos, y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran compartir con nosotros los ideales de igualdad y democracia, invocando el derecho de los pueblos y la memoria de nuestros mártires: Ordenamos, decretamos y establecemos ésta Constitución, para el goce del pueblo trabajador de la República.

Artículo primero

Esta Asamblea Popular Constituyente proclama la Segunda Independencia y la Soberanía Nacional respecto del imperialismo, conjuntamente con la caducidad de todo Acuerdo, Pacto o Tratado que la corrupta clase dirigente haya establecido anteriormente con cualquier potencia extranjera.

Artículo segundo

Se declara infames traidores a la patria a quienes hayan firmado, votado o consentido la entrega del patrimonio nacional a las empresas multinacionales y hayan permitido a sus gobiernos cualquier forma de injerencia política, económica y militar.

Artículo tercero

Se ordena la incautación inmediata de todos los bienes públicos (empresas de servicios y demás recursos del Estado), apropiados indebidamente por la gran burguesía internacional, poniéndolos bajo administración y gestión de sus trabajadores, libre y democráticamente organizados.

Artículo cuarto

Se somete al juicio popular por jurados a los culpables de enriquecimiento personal a causa de las privatizaciones y la entrega del patrimonio nacional así como de toda otra forma de corrupción administrativa.

Artículo quinto

Se desconoce todo compromiso financiero contraído con los usureros externos o sus agentes y comisionistas internos.

Artículo sexto, y siguientes

solamente de un cambio político en el país sino también de una nueva coyuntura en la lucha de clases, favoreciendo el cambio en la correlación de fuerzas de la región. Como dice Horacio Lagar: “cualquier consigna puede generar un proceso revolucionario, dado que ninguna nace con un signo genético de clase predeterminado para siempre. Si así fuera, los bolcheviques de 1917 no habrían podido utilizarla para acaudillar a las masas hasta transformar ‘revoluciones democráticas de febrero’ en octubre victoriosos” (Lagar, 2007: 18). Esto asusta a todos: “yanquis” y “bolivarianos” por igual.

El motivo mismo del golpe parlamentario es un cencerro que denuncia el carácter regresivo y anémico de ese aborto que ha potenciado una crisis de dominación de magnitudes insospechadas. Encontrar la razón en la sinrazón es arduo, pero creemos que Lugo había dejado de ser útil en la tarea de contener las luchas sociales, fundamentalmente la histórica lucha por la tierra, y ésa fue la motivación principal de su deposición. Su desgaste político era cada vez mayor y ya no conseguía desviar los conflictos en el campo con la misma eficiencia que al comienzo de su gestión. El golpe, ejecutado a un año de las presidenciales, nombra también las debilidades del imperialismo norteamericano y su decidida política de recuperar terreno en la región ejerciendo lo que algunos intelectuales definen “dominación sin hegemonía” (Borón, 2012). Para quienes pensamos que la primacía político-económica y cultural del imperialismo norteamericano tiene aún bases más firmes que las 18 bases militares que cuenta en territorio sudamericano, esta imprudencia no es sino una de las formalidades de la falacia. Puesto que:

no hay todavía ninguna señal seria del “declive de los Estados Unidos como potencia hegemónica ilusamente prevista, no obstante la aparición de numerosos síntomas de crisis en el sistema global. Porque las contradicciones que podemos identificar atañen a la totalidad del sistema del capital global interrelacionado, en el cual el capital norteamericano ocupa, mantiene y ciertamente continúa fortaleciendo su posición dominante en todo respecto; paradójicamente, incluso, mediante sus prácticas -a primera vista bastante vulnerables, pero hasta el

(Sobre éstos principios básicos para la recuperación de la Soberanía Nacional, los artículos siguientes de esta Constitución tenderán a garantizar la más amplia participación democrática del pueblo trabajador a través de sus organizaciones de base).

Cláusula transitoria

A los efectos de la reconstrucción de la Nación Paraguaya, se dispone la caducidad absoluta de todos los cargos actuales de los poderes ejecutivos de la Nación, las Provincias y las Municipalidades, como así mismo la caducidad de los cargos de todos los poderes legislativos de la Nación, las Provincias y deliberativos municipales, haciéndose cargo del gobierno ésta Asamblea Popular Constituyente hasta el momento de la asunción de las nuevas autoridades que emanan de la libre voluntad del pueblo trabajador. Respecto de los Poderes Judiciales, de todos los fueros, instancias y jurisdicciones, incluida la Corte Suprema, se dispone su total caducidad siendo reemplazados por los jueces que en comicios libres, directos y secretos elijan los trabajadores para presidir los tribunales populares que se encargarán de impartir justicia en todo el territorio de la Nación, a partir de la vigencia de ésta Constitución.

momento exitosamente impuestas sin demasiada oposición– de imperialismo con tarjeta de crédito (Metzarós, 2009: 62).

Y sin negar, entonces, la debilidad del mal llamado “nuevo golpismo latinoamericano” (Errejón y Serrano, 2012) tomamos nota que el gobierno ilegítimo asumió el problema de su aislamiento internacional con la “American Express” del imperialismo. Y puesto que el mayor bloque de aliados del nuevo proyecto autoritario es el de las multinacionales del agronegocio y demás empresas extractivas del capital transnacional, la negociación entre el imperialismo y el bloque del capitalismo regional tuvo y tendrá un carácter incruento. En ese sentido, entre las medidas del nuevo gobierno ya se cuentan la habilitación del Proyecto Río Tinto Alcán, la aprobación de la utilización de semillas transgénicas e incluso la posibilidad de la reapertura de la base militar norteamericana en el Chaco paraguayo. Más teniendo en cuenta la gobernabilidad futura, el pacto oligárquico tiene alcances muy limitados. Podemos decir que el mismo gobierno de Franco no ha caído debido a la capitulación del luguismo que asumió la coyuntura como un interregno propicio para devolver el país a la senda de la democracia conservadora que requiere tanto el imperialismo yanqui como el capitalismo brasileño. Como infiere el Secretariado Internacional de la LIT:

Lugo no tiene ningún interés en movilizar ni enfrentar el golpe porque, como todos los demás sectores burgueses, el Mercosur y el imperialismo, quiere evitar cualquier tipo de inestabilidad y conducir toda la crisis por la vía muerta de las elecciones burguesas, convocadas para el 21 de abril de 2013 y para las cuales él ya anunció su candidatura a senador o, incluso, a presidente. Es claro que esta política legitima el golpe reaccionario (2012).

No obstante, ello no obtura la cuestión de que los proyectos en pugna sigan siendo (en su manifestación electoral y visibilidad masiva) los del Frente Guasu y el Partido Colorado¹⁵; y más allá de lo meramente electoral, el plano en que dirimirán el enfrentamiento inmediatamente después de las urnas será el de la lucha de clases. Estas elecciones serán de

¹⁵ La ruptura del Frente Guasu en dos bloques ha potenciado más aún la crisis del régimen. Las alternativas y posibilidades de los que manejan el poder, con miras a las próximas elecciones, están sumamente complicadas. La idea de los distintos sectores de la burguesía paraguaya es, indudablemente, no perder nuevamente el gobierno por culpa de las elecciones. Pero es tan endeble el régimen que todo lo que hagan tiene su pro y su contra. Si permiten la participación de Lugo en la carrera presidencial les pueden ocurrir dos cosas: por un lado, el papelón universal de que las gane; pero por otro lado les daría una ventaja: provocaría una fractura en el frente opositor, dividiendo los votos entre los partidarios de Ferreiro y de Lugo. Si no le permiten la candidatura presidencial a Lugo, le dejan el campo libre a Mario Ferreiro que puede ganar incluso con el 35% de los votos. Está claro, por otra parte, que la maquinaria electoral del PLRA no podrá revertir a favor de Efraín Alegre el peso de la ejecutoria del golpe ni aún con el uso prebendario del aparato del Estado. Patria Querida enfrenta un proceso de desafiliación masiva y P-UNACE tiene acotado su espacio por la ANR y su discurso ultra-derechista. Para cotejar el clima de oscilaciones e impresionismos veamos dos artículos publicados por el mismo autor, el historiador Bernardo Coronel, en el diario *e'a digital*; uno es del 15 de octubre de 2012 “La izquierda destrozada” (<http://ea.com.py/la-izquierda-destrozada>) y el otro del 1 de noviembre de 2012, “La izquierda amenaza las elecciones en Paraguay” (<http://ea.com.py/la-izquierda-amenaza-las-elecciones-en-paraguay>).

vital importancia para las masas populares; rubricarán una salida para el problema agrario y la soberanía política, puesto que el carácter del conflicto no es sólo económico y político sino también cultural. La derecha no necesita golpes blandos sino una derrota histórica contra el movimiento campesino y su lucha por la Reforma Agraria. Razón por la cual creemos que las contradicciones del Frente Guasu pueden desatar sacudimientos mayores que generen un alza ostensible en la lucha de clases. El análisis concreto de la situación dictamina que alejarse hoy de las masas es tan perjudicial como caer en una política de claudicación a la burguesía. Hay quienes ven en esta paradoja una tragedia, en el sentido hegeliano del concepto. Nosotros creemos que el resultado depende de la lucha de clases, en la cual estamos inmersos. Aún no hemos llegado a la parte más cruenta de la pelea pero la derecha viene por todo.

Bibliografía

Abente, D. (2010). Después de la dictadura. En Telesca, Ignacio (coord.), *Historia del Paraguay* (pp. 295-313). Asunción: Taurus.

Abente, D. (2012). Hacia una democracia de calidad. En D. Abente Brun y Dionisio Borda (eds.) *El Reto del Futuro. Asumiendo el legado del bicentenario* (pp. 25- 56). Asunción: Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay.

Acevedo, V. (2011). Procesos de militarización en crecimiento, mientras, derechos humanos en retroceso. En CODEHUPY, *Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay* (pp. 431-443). Asunción: Codehupy.

Boccia Paz, A., González, M. A. & Palau Aguilar, R. (1994). *Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner*. Asunción: CDE.

Borón, A. (2012a). ¿Por qué derrocaron a Lugo? Blog de Atilio Borón 22 de junio de 2012. Recuperado de <http://www.atilioboron.com.ar/2012/06/por-que-derrocaron-lugo.html>

Borón, A. (2012b). El imperio viene por todo. Entrevista realizada por Aporrea TV durante el XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, julio de 2012. Recuperado de <http://youtu.be/Zss-TZ1MF0k>

Borón, A. (2012c). Los cambios en la doctrina estratégica de Estados Unidos y el papel de América Latina. Ponencia presentada en el encuentro internacional *La UNASUR y los nuevos desafíos de la integración sudamericana*. Quito: Auditorio IAEN, 19 de Junio. Recuperado de http://youtu.be/_ApN_wmFkGw

Brítez, E. (diciembre de 2002). La devaluación del voto ciudadano como resultado del deterioro de la representatividad. *Novapolis*, 1, 61-67.

Calloni, E. (1 de julio de 2012). Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay. En *Cubadebate*, Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/07/01/detras-del-golpe-nuevas-bases-en-paraguay>

Céspedes, R. (1999). Los actores sociales en el Marzo Paraguayo de 1999. En R. Céspedes (et al.) *Marzo Paraguayo: huellas, olvidos, urgencias* (pp. 145-178). Asunción: Universidad Católica.

Chaves, O. (1971). *Contribución a la doctrina de la revolución paraguaya*. Buenos Aires: Editorial Canendiyú.

Comisión Verdad y Justicia del Paraguay (2010). *Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia del Paraguay-Anive Haguá Oiko*. Asunción: CVJ.

Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (26 de octubre de 2012). ¿Cuál es la responsabilidad de Lugo y el Frente Guasu? Recuperado de http://ptparaguay.org/v3/contenido.php?id_contenido=247

Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (3 de noviembre de 2012). ¿Por qué el golpe parlamentario y por qué tan vertiginoso? Recuperado de http://ptparaguay.org/v3/contenido.php?id_contenido=247

Congreso Nacional del Paraguay (1999). Expediente: “Investigación del asesinato del Vicepresidente Constitucional de la República del Paraguay, Dr. Luis María Argaña, de la matanza y desaparición de personas como consecuencia de los hechos de violencia acaecidos entre los días 23 y 28 de marzo de 1999 y la supuesta participación, directa o indirecta, de Senadores y Diputados en los hechos mencionados”. Asunción: CNP.

Coronel, B. (1 de noviembre de 2012). La izquierda amenaza las elecciones en Paraguay. E'a Digital. Recuperado de <http://ea.com.py/la-izquierda-amenaza-las-elecciones-en-paraguay/>

Coronel, B. (15 de octubre de 2012). La izquierda destrozada. E'a Digital. Recuperado de <http://ea.com.py/la-izquierda-destrozada/>

Errejón, I. y Alfredo S. (26 de junio de 2012). El nuevo golpismo en América Latina. En Página 12. Recuperado de <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-197227-2012-06-26.html>

Espínola, N. (ed.). (11 de agosto de 2009) Según escritos, el EPP cuenta con 60 efectivos. ABC Digital. Recuperado de <http://www.abc.com.py/abc/nota/13004-Seg%C3%BAAn-escritos,-el-EPP-cuenta-con-60-efectivos/>

Farina, B. y Boccia Paz, A. (2010). El Paraguay bajo el Stronismo (1954-1989). Asunción: El Lector / ABC color, Colección La Gran Historia del Paraguay, 13.

Fogel, R. (abril de 2009). El gobierno de Lugo, el Parlamento y los movimientos sociales. *OSAL* (pp. 51-63), 10, 25.

Galeano, L. (diciembre de 2002). Continuidades y discontinuidades de la sociedad paraguaya. *Novapolis*, 1, 29-34.

Lagar, H. (septiembre de 2007). Los movimientos nacionalistas y las demandas democráticas. *Pluma*, 6, 12- 21.

LIT- CI (10 julio de 2012). Derrotemos el golpe parlamentario y el gobierno de Franco en las calles. Recuperado de <http://ptparaguay.org/v3/>

LIT- CI (octubre 1999). Paraguay: la lucha de un pueblo y una alternativa para los sin-tierra. Monográficos de Lucha Internacionalista, s / n: LIT-CI.

Lynch, N. (1992) *La transición conservadora. Movimiento social y Democracia en el Perú 1975-1978*. Lima: El zorro de abajo ediciones.

Martínez, A.; Laíno, D. & Quevedo, J. M. (2012). *Informe Masacre Curuguay*. Asunción: PEICC.

Marx, K. (1989). *Contribución a la crítica de la economía política*. Moscú: Ediciones Progreso.

Massi, F. (2006). *Paraguay: los vaivenes de la política comercial externa en una economía abierta*. Asunción: CADEP.

Metzarós, I. (2005). *Socialismo o barbarie. La alternativa al orden social del capital*. La Habana: Pasado y Presente XXI.

Metzarós, I. (2009) *La crisis estructural del capital*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay (2012). *Informe de Gestión, 2010-2011* (pp. 29-35). Asunción: Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay.

Montalvo Ortega, E. (febrero de 2001) *México: Transición Conservadora o democracia sustancial*. Casa México 1997-2001 Informe Final.

Nickson, A. (julio- agosto 2008) Una oportunidad para el Paraguay. Los desafíos de Fernando Lugo. *Nueva Sociedad*, 216, 4-16.

Palau, M. y Kreschmer, R. (enero- abril de 2004) La ‘guerra de la soja’ y el avance del neoliberalismo en el campo paraguayo. *OSAL*, 5, 13, 105-115.

Palau, T. (junio de 2005). El movimiento campesino en el Paraguay: conflictos, planteamientos y desafíos. *OSAL*, 6, 16, 35-46.

Peña, Milcíades (2007) *Introducción al pensamiento de Marx*. Buenos Aires: A Formar Filas.

Pereira, H. (11 diciembre de 2011). La aparición del EPP en un escenario de conflictos ante el grosero avance del modelo agroexportador. Recuperado de <http://hugopereirac.blogspot.com.ar/2011/12/la-aparicion-del-epp-en-un-escenario-de.html>

Pereira, H. (13 de marzo de 2011). Periodista sospecha que el EPP es un instrumento de sojeros para criminalizar campesinos. Blog del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Recuperado de <http://periodistaspy.blogspot.com.ar/2011/03/periodista-sospecha-que-el-epp-es-solo.html>.

Quintana, G. (31 de marzo de 2012). Ñacunday o el resumen de la subversión. Abc color. Recuperado de <http://www.abc.com.py/edicion-impres/opinion/nacunday-o-el-resumen-de-la-subversion-385295.html>

Richer, H. (2008) *Paraguay: fin de un periodo histórico*. Asunción: BASE-IS, Documento de trabajo nro. 123.

Richer, H. (septiembre- diciembre de 2006). Paraguay: crisis y expectativas de cambio. *OSAL*, 7, 21, 59-107.

Riquelme, Q. (2003) Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya. En J. Seoane, *Movimientos sociales y conflictos en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Programa OSAL.

Rodríguez, J.C. (septiembre-octubre de 1998) Paraguay. Transición sin alternancia. *Nueva Sociedad*, 157, 29-33

Setrini, G. (marzo de 2011). Veinte años de democracia electoral en Paraguay: del clientelismo monopólico al clientelismo plural. Asunción: TFI- Proyecto Bicentenario- CADEP, Working Paper 3.

Sosa, S. (13 de marzo de 2012). Aparatoso operativo sin resultados en Ñacunday. Abc color. Recuperado de <http://www.abc.com.py/articulos/aparatoso-operativo-sin-resultados-en-nacunday-378931.html>

Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (12 mayo de 2003) Resultados definitivos, Sentencia n° 2, Asunción: Paraguay. Recuperado de <http://elecciones.pyglobal.com/resultadostot.php>

Trotsky, L. (2008). *Programa de Transición. La agonía del capitalismo y las tareas de la IV Internacional*. Buenos Aires: Ediciones El Socialista.